

Rancagua cinco de noviembre de dos mil veintiuno

VISTOS:

Con fecha 11 de septiembre del año 2021, comparece don Francisco Javier de la Cruz Sánchez Avilés, abogado, domiciliado para estos efectos en calle Campos 241 Piso cuarto oficina 4 Rancagua, en beneficio de don **Francisco Ignacio Vergara Peñaloza**, domiciliado en Héctor Zamorano N°1600 comuna y ciudad de Rancagua, y viene en deducir recurso de protección en contra **de Corporación Instituto Profesional Santo Tomas**, Rut N° 65.175.239-6, representada legalmente por Don Manuel Olmos Muñoz, ignora profesión u oficio, cédula nacional de identidad N° 10.404.764-5, ambos domiciliados en Calle Oficiales Gamero N° 080, de la ciudad y comuna de Rancagua, en razón a los siguientes argumentos de hecho y de derecho que en su presentación expuso.

Indica que actualmente es estudiante de tercer año de la carrera de Construcción Civil del Instituto Profesional Santo Tomas, añadiendo que según su plan de estudios y malla curricular, concierne incorporarse al segundo semestre de 2021, correspondiente al tercer año de carrera, y tomar los ramos respectivos correspondientes a dicho semestre académico; sin embargo la institución educacional recurrida le ha negado dicha posibilidad, por existir mora en el pago de los aranceles respectivos, que ascienden a un monto total de \$1.334.188.-, y que corresponde a una deuda de arrastre del primer semestre del año 2021.

Afirma que mantuvo conversaciones por correo electrónico con la directora de Administración y operaciones de la Sede Rancagua del instituto profesional Santo Tomas, quien le manifestó por dicha vía que *“Para realizar toma de ramos, debe regularizar el total de su situación financiera al mes de julio. Otra alternativa es pagar hasta el mes de agosto y su colegiatura de junio y julio se traspasan al mes de enero y febrero 2022.”*

Asimismo, en otro de los correos electrónicos intercambiados le señala que el monto a pagar asciende a \$1.334.188.-, y cuyo pago es la única alternativa para poder realizar su incorporación académica como alumno regular del segundo semestre 2021 y tomar los ramos respectivos.



Indica que la corporación educacional recurrida le ha negado inclusive la posibilidad de participar en las clases respectivas como oyente y en consecuencia no puede participar de las clases “on line”, ni de las clases presenciales que se están empezando a desarrollar en el Instituto.

Arguye que la casa de estudios recurrida cuenta con una gama de acciones que le franquea la ley para exigir judicialmente el pago de los montos correspondientes a la deuda de arrastre, como una gama de acciones legales para garantizar el pago de los mismos, sin embargo, el “bloqueo” realizado esta fuera de sus posibilidades jurídicas por aplicación de la normativa actual de los derechos fundamentales garantidos en la Constitución política de la República.

Concluye indicando que el actuar de la recurrida infringe la garantía de igualdad ante la ley contenida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, toda vez que privilegia a aquellos alumnos que se encuentran al día en el pago de sus compromisos económicos, arbitrariamente por sobre los que no lo están, permitiendo a unos la toma de ramos y a otros no, por el solo hecho de no encontrar al día en el pago de los aranceles respetivos.

Previas citas legales solicita a esta I. Corte tener por interpuesto recurso de protección y en definitiva se acoja declarando que se ordene a la entidad educacional recurrida, permitir la toma de ramos e incorporación académica regular para el segundo semestre académico del año 2021, con expresa condenación en costas en caso de oposición de la contraria.

Por su parte y con fecha 6 de octubre del año 2021, compareció la recurrida y procedió a evacuar el respectivo informe, indicando que la parte recurrente pretende a través de este procedimiento rápido -y yendo contra su naturaleza- obtener declaraciones y decisiones que se vinculan a un contrato de prestación de servicios educacionales y a los reglamentos dictados por el Instituto Profesional Santo Tomás, en razón del principio de autonomía.

Afirma que la petición de permitir la inscripción de asignaturas existiendo una deuda de arancel, son cuestiones reguladas de forma expresa en el contrato precitado y en el Reglamento Académico de los Estudiantes de Instituto Profesional Santo Tomás, por lo que se trata de una pretensión



que no ha de poder discutirse en este procedimiento sumarísimo, y lo cierto es que ella debe hacerse a través de los cauces ordinarios y no como ha ocurrido en la especie. Así las cosas, si se pretende lesionado el recurrente por el contenido de las obligaciones contractuales, será el Juez ordinario quien a requerimiento de él así lo declarará, pero en el procedimiento pertinente para ello, con los plazos y garantías procesales que procedan y no en esta sede especial.

Arguye que tanto en el contrato de prestación de servicios educacionales, así como en el reglamento académico precitado se contiene la exigencia de no tener deudas con la institución, como requisito previo a la inscripción de asignaturas, y en caso de existir deudas, se le otorga al estudiante la posibilidad de repactar las mismas, de forma tal que, al comenzar cada periodo académico, exista claridad para ambas partes respecto de la situación financiera del estudiante, en su caso a la fecha de toma de ramos, mantenía una deuda por concepto de matrícula, 4 cuotas vencidas del arancel del primer semestre y cuatro cuotas vencidas de una reprogramación correspondiente al año académico 2020.

Relata que con fecha 17 de agosto último, el recurrente se contactó con la Directora de Administración y Operaciones de Sede Rancagua para consultar por el estado de su deuda y las opciones de pago, oportunidad en la cual, se le respondió explicándosele las opciones mencionadas anteriormente, en los siguientes términos: *“Para realizar la toma de ramos, debe regularizar el total de su situación financiera al mes de julio. Otra alternativa es pagar hasta el mes de agosto y su colegiatura de junio y julio se traspasan al mes de enero y febrero de 2022”*.

Añade que con fecha 23 de septiembre último, aún luego de haber presentado este recurso de protección, el estudiante planteó: *“Señorita Jessica buenas tardes, quería saber si existe la posibilidad de realizar un pago del 50% de la deuda que tengo en estos momentos y agendar como plazo extraordinario. Saludos y quedo atento a su respuesta.”*, lo que con fecha 24 de septiembre, fue respondido positivamente manifestando que era posible aceptar un abono del 50% de la deuda y el saldo podía reprogramarse en cinco cuotas con pago entre los meses de octubre a febrero próximo, de este modo se descarta cualquier atisbo de capricho o



arbitrariedad respecto de la negativa a la inscripción de asignaturas y de las condiciones de repactación impuestas al estudiante recurrente, en primer lugar, porque se encuentra plenamente fundada, y en segundo, porque no se ha alegado ni menos acreditado que esta normativa se aplique selectivamente a determinados estudiantes.

Asegura que su actuación tampoco es ilegal, desde que no contraría normativa legal alguna, si no por el contrario, se funda en la reglamentación de la institución, dictada en el marco de la independencia administrativa y económica de la misma, asegurada por el artículo 2° de la Ley N° 21.091, sobre educación superior, y en el contrato de prestación de servicios educacionales, suscrito voluntariamente por el recurrente, y que por lo mismo la obliga.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido por el constituyente como una acción de urgencia destinada a evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de acciones u omisiones arbitrarias o ilegales, que produzcan privación, perturbación o amenaza de alguna o algunas garantías constitucionales expresamente señaladas en la Constitución Política de la República, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección a quien pueda resultar afectado.

SEGUNDO: Que el acto ilegal y arbitrario que el actor reprocha de la recurrida, estaría dada por la negativa de esta última a permitirle incorporarse al segundo semestre académico del año 2021, y realizar la toma de ramos respectiva, correspondiente a su tercer año de carrera, por existir mora en el pago de los aranceles, correspondiente a una deuda de arrastre del primer semestre del año 2021; situación que constituiría una grave privación, perturbación, y amenaza a sus derechos consagrados en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la Republica.

TERCERO: Que la sociedad educacional recurrida informó que la negativa, no constituiría un acto arbitrario o ilegal, por cuanto al regularse la relación entre las partes por medio de un contrato privado de prestación de servicios educacionales, prevalece la autonomía de la voluntad y el presente caso se encuentra justificado en los reiterados incumplimientos por



parte del recurrente en el cumplimiento de sus obligaciones de pago de mensualidad.

CUARTO: Que son hechos no discutidos y que constan en los antecedentes de la acción, la efectividad de que el recurrente don Francisco Ignacio Vergara Peñaloza es actualmente alumno de 3° año de la carrera de Construcción Civil del Instituto Profesional Santo Tomas, el que además adeuda al menos la suma de \$1.178.664.-, y el que la recurrida no permitió su inscripción de asignaturas para el segundo semestre del año 2021, mientras no solucionara o renegociara la deuda de conformidad a los términos que ésta le propuso.

QUINTO: Que para resolver el asunto es necesario considerar que la cláusula séptima del contrato de prestación de servicios educacionales suscrita por el recurrente señala: *“El Alumno que se encuentre en mora en el pago de una o más cuotas de los aranceles mensuales podrá inscribir asignaturas para el semestre académico siguiente en la medida que el Alumno re programe, renegocie o regularice la deuda morosa con la Institución.”*

Por su parte, el artículo 5 del Reglamento Académico de Estudiantes de IPST, señala: *“Aquellos alumnos matriculados que no cumplan con los compromisos económicos contraídos en el contrato de prestación de servicios educacionales, no podrán renovar su matrícula, tampoco inscribir asignaturas para un periodo académico posterior, salvo que respecto de ellos haya tenido lugar una repactación o prórroga y siempre que al momento de la renovación no se hayan incumplido condiciones establecidas en éstas.”*

De esta forma consta tanto en el contrato de prestación de servicios educacionales, como en el reglamento académico, la exigencia de no tener deudas con la institución, como requisito previo a la inscripción de asignaturas, y en caso de existir, se le otorga al estudiante la posibilidad de repactar las mismas.

SEXTO: Que de lo señalado precedentemente queda de manifiesto que la recurrida en estos autos no incurrió en un acto arbitrario e ilegal que hubiese provocado contra el recurrente privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguna de las garantías constitucionales cauteladas por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, primero,



porque la institución recurrida ha cumplido cabalmente el contrato que suscribió el alumno y que se encuentra plenamente vigente, por lo que no se divisa norma legal transgredida, y en segundo término, tampoco resulta arbitrario puesto que la política implementada en virtud del principio de la autonomía de la voluntad, es transversal al alumnado que se encuentran en el mismo supuesto de hecho, es decir, con deudas que superen una determinada cantidad de cuotas y que sirve de fundamento para requerir una regularización de arancel previa a la matrícula de cada año académico, sin que se haya acreditado que ésta realice alguna diferencia caprichosa o contraria a la razón.

A mayor abundamiento esta facultad ejercida por la institución educacional se ve expresamente amparada por el ordenamiento jurídico, conforme lo dispone el artículo 55 letra e) de la ley 21.091, lo que representa el sustento legal que autorizaba a la recurrida a desplegar las conductas que en el arbitrio le son reprochadas.

SEPTIMO: Que teniendo además presente, que lo discutido en la presente acción es el cumplimiento o exigibilidad de un contrato de prestación de servicios educacionales, cuestión que escapa al ámbito de conocimiento de la presente acción cautelar, la que por su propia naturaleza es de urgencia y brevísima y no constituye una instancia “declarativa de derechos” o bien de cumplimiento forzado de los mismos, sino que, como su nombre lo indica, de protección de aquellos cuya existencia no cuestionada se encuentran afectados por algún acto ilegal o arbitrario, por lo que escapa al ámbito de aplicación de la acción constitucional, en este sentido la problemática en análisis resulta más bien propia de un juicio ordinario de lato conocimiento, que tenga por finalidad desentrañar el verdadero sentido y alcance de las normas convencionales generadoras de las obligaciones suscritas por las partes; todas razones suficientes para desestimar el recurso, todo sin perjuicio de otros derechos que se puedan hacer valer ante las entidades correspondientes y mediante las acciones que para dichos efectos dispone la ley.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección



de Garantías Constitucionales, se declara que, **se rechaza**, el recurso deducido por don Francisco Ignacio Vergara Peñaloza, en contra de Corporación Instituto Profesional Santo Tomas, sin costas.

Acordado con el voto en contra del Abogado Integrante Sr. Veloso quien estuvo por acoger el recurso de protección en razón de que más allá de los términos en que este ha sido planteado en el libelo, lo cierto es, que a fin de cuentas el derecho comprometido en el asunto sometido al conocimiento de esta Corte es el derecho a la educación reconocido a nivel supranacional en el artículo 13° del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; asimismo en el artículo 19 N°10 de la Constitución; y, en el artículo 1° de la Ley N° 21.091, normativa de la cual es posible extraer tanto el rol social que este derecho posee, como la accesibilidad a la misma que el Estado debe garantizar.

En ese contexto, la tensión entre el señalado derecho, los efectos emanados del contrato de servicios educacionales suscrito por el actor, y el principio de autonomía de la voluntad comprometido en ello, ha de ser resuelto privilegiando la referida garantía, sin perder de vista, además, que la recurrida posee las herramientas que el legislador prevé para el cumplimiento forzado de las obligaciones, las cuales no ha utilizado previo al acto que se le reprocha, el que por estas razones -en opinión de esta disidencia-, resulta ser arbitrario y contrario al ordenamiento jurídico.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol I. Corte 12353-2021 Protección.

**RESUELTO POR LA PRIMERA SALA DE LA ILTMA.
CORTE DE APELACIONES DE RANCAGUA, SUBROGANDO
LEGALMENTE A LA TERCERA SALA.**





XHOKZRXKB

Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Rancagua integrada por Ministra Suplente Visnia Faridi Mahmoud A., Fiscal Judicial Joaquin Ignacio Nilo V. y Abogado Integrante Alberto Salvador Veloso A. Rancagua, cinco de noviembre de dos mil veintiuno.

En Rancagua, a cinco de noviembre de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



XHOKZRKB